

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan por el C. Miguel M. Doporto, contra el ejecutivo del Estado que sancionó el decreto de 25 de Marzo último y el Tribunal de 3ª instancia que aplicó en su persona dicho decreto, que prohíbe representar derechos ajenos sin título de abogado, disposicion contraria á los artículos 4º 7º y 28 de la Constitucion federal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El infrascrito, evacuando el traslado que V. mandó se le dé en estas diligencias relativas al amparo solicitado por el C. Miguel María Doporto, quien lo promueve por considerar que el decreto de la Legislatura del Estado de 25 de Marzo último viola en su persona las garantías que otorgan los artículos 4º 7º y 8º de la Constitución general, fundándose en la fracción 1ª art. 1º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, habiendo examinado la cuestión bajo los distintos aspectos que presenta, vé demostrado, en su concepto, que estableciendo el artículo 3º de la expresada carta constitucional la taxativa del título y requisitos que se previenen para el ejercicio de ciertas profesiones, entre las que no puedo dudarse que se comprende la abogacía, estando vigente y en observancia en esta materia la legislación anterior mientras no se expida la ley reglamentaria del citado art. 3º, es inconcuso por tanto, que deben exigirse exámenes y título para poder ejercerla, como la medicina y otras ciencias que afectan los intereses mas caros de la sociedad, sobre la que recaerian males irreparables si las leyes no hubieran previsto en toda nación civilizada la manera de evitarlos. Así, pues, la libertad que todo

hombre tiene garantida por nuestra Constitución para abrazar la profesion, industria ó trabajo que le acomode, es la que se contrae en este punto al ejercicio de lo útil y honesto, y para que así sea en bien de los demás hombres, sábiamente el legislador ha querido prescribir una condicion para esa libertad, estableciendo que se use de ella previos los requisitos legales. No habiéndolos acreditado el quejoso para ejercer la abogacía, mal puede haberse conculcado en su perjuicio el artículo 4º constitucional por que no lo ataca el decreto referido de la legislatura del Estado, careciendo por consiguiente de todo fundamento las alegaciones del promovente, para las que no es oportuna la cita que hace de los artículos 7º y 8º de la misma Constitución.

En virtud de estas consideraciones, el fiscal que suscribe es de opinión, que no debe accederse á la solicitud del C. Miguel María Doporto, por no haber lugar al amparo que en ella pide. Mérida, Abril veinticinco de mil ochocientos setenta y uno.—
T. Díaz Pérez.

Sentencia del Juez de Distrito.

Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan.

Mérida, Mayo dos de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo, promovido por el C. Miguel M. Doporto, contra el ejecutivo del Estado que sancionó el decreto de 25 de Marzo último, y el Tribunal de 3ª instancia que aplicó en su persona dicho decreto, que prohibe representar derechos ajenos sin título de abogado, disposicion contraria al art. 4º, 7º y 28 de la Constitución de la República, segun se alega. Visto el auto en que se negó la suspension del acto reclamado; el informe de las autoridades contra quienes se dirige esta

queja; el parecer fiscal, la citacion para sentencia y considerando: que por el art. 4º de la Constitucion federal, todo hombre es libre para abrazar la profesion, industria ó trabajo que le acomode, siendo útil y honesto: que la honestidad y utilidad se presumen mientras no se pruebe lo contrario: que no se ha expedido la ley que ha de marcar las excepciones de este artículo, determinando las profesiones que necesiten de título para su ejercicio: que toda la vez que no se ha dado tal ley restrictiva, el art. 4º citado es general y absoluto, equivaliendo ante él la prohibicion de representar derechos agenos en juicio, sin título de abogado, á prohibir el ocuparse en un oficio cualquiera, porque ese artículo garantiza la libertad del trabajo, sea cual fuere: que aun cuando se quiera decir que las leyes anteriores á la Constitucion, se deban aplicar á falta de la orgánica, aquellas no prohibian representar derechos agenos á los que no eran abogados, como consta por las leyes 1ª, 5ª y 13 título 5º partida 3ª y la ley 3ª título 3º libro 11 Nov Rec: que si los que representan derechos agenos sin título, perjudican á un tercero ó á la sociedad, el propio art. 4º constitucional, señala el modo de remediar ese mal por sentencia judicial ó resolucion gubernativa; pero ese mismo remedio no se aplica en general, como la ley que motiva esta queja, sino que se dirige al individuo, respetando la libertad en que está el hombre de abrazar el trabajo que le acomode: que además, cada uno debe cuidar de encomendar la representacion de sus derechos al mas competente y no fiarse nunca de la ignorancia y la mala fé, siendo la ilustracion y el buen sentido las únicas reglas para apreciar estas cualidades y no la ley; porque solo ellas preservan con seguridad de caer en manos de ignorantes ó mal intencionados sin título ó con él: que en apoyo de lo expuesto, puede citarse el artículo 93 de la carta fundamental, que para ser electo individuo de la Suprema Corte de Justicia

exige, apenas estar instruido en la ciencia del derecho, á juicio de los electores, y no el tener título de abogado, sin embargo de que para aquella categoría se requieren mayores conocimientos que para representar derechos agenos, en particular cuando estos son de menor cuantía y de los cuales no se ocupan los abogados: que en este sentido existe una ejecutoria de la Corte Suprema de Justicia nacional, de 12 de Agosto de 1870, en el amparo pedido por D. Fernando Vargas, contra el ayuntamiento de Pachuca, que le privó de curar por medio de imposicion de manos: que los art. 7º y 28 de la Constitucion citados, son inconducentes en este juicio. Por estos legales fundamentos, la autoridad en nombre de los Supremos Poderes de la Union, decreta:

Primero: se ampara y protege al C. Miguel M. Doporto, contra el ejecutivo del Estado y el Tribunal de 3ª instancia, por haber sancionado el primero, el decreto local de 23 de Marzo último; y el segundo, por haberle aplicado dicho decreto, que prohibe representar derechos agenos á los que carecen de título de abogado.

Segundo: sáquese testimonio de este fallo, para su publicacion; y elévense los autos á la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos mexicanos para su revision, ambas cosas de conformidad con los art. 13 y 27 de la suprema ley de 20 de Enero de 1869. Notifíquese.—*I. Manzanilla.*—Ante mí.—*José Anacleto Castillo.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo siete de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan, por el C. Miguel M. Doporto, contra el ejecutivo del Estado que sancionó el decreto de

25 de Marzo último y el Tribunal de 3ª instancia que aplicó en la persona del quejoso dicho decreto, que prohíbe representar derechos ajenos sin título de abogado: Considerando: que la publicación de la ley no importa por sí sola, violación de las garantías individuales en el caso particular del quejoso; que la aplicación del decreto en los dos casos que se indican en el expediente, cede en menoscabo de la libertad que todo hombre tiene de encomendar el giro de sus negocios á la persona que le parezca mas á propósito y á monopolizar en quienes tengan título para ejercer la abogacía, el cargo de apoderado, lo cual es contrario á lo que dispone el art. 28 de la Constitución federal, se decreta:

Primero: que se revoca la sentencia pronunciada el día 2 del próximo pasado Mayo, por el Juzgado de Distrito de Yucatan, en la parte que declara: que se ampara y protege al C. Miguel M. Doporto contra el ejecutivo del Estado, por haber sancionado el decreto local de 25 de Marzo último.

Segundo: se confirma dicha sentencia en la parte que declara que se ampara y protege al C. Miguel M. Doporto, contra el Tribunal de 3ª instancia, por haberle aplicado dicho decreto, que prohíbe representar derechos ajenos, á los que carecen de título de abogado.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de Distrito de Yucatan, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos, los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lafragua.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*Simón Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Za-*

vala.—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copias que certifico. México, Junio doce de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta,* oficial mayor.

AMPARO

Juicio promovido ante el Ingreso de Distrito de Yucatan por la sociedad mercantil que gira en esa ciudad bajo la razon social "Ibarra, Dondé y C^{ta}" contra los actos del C. Tesorero general del Estado que les cobra la cantidad de quinientos cuarenta y tres pesos setenta y ocho centavos, derecho del uno por ciento de patente de giro, conforme al decreto de 27 de Marzo de 1863, declarado vigente en 10 de Agosto de 868 y 24 de Setiembre de 870, por efectos extranjeros importados en 26 de Enero y 6 de Febrero últimos, por la barca inglesa "James Duckett," y vapores "City of Merida y City of México"

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR
FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El que suscribo, llevando la voz fiscal en el asunto que motiva el amparo solicitado por los Sres. Ibarra, Dondé y C^{ta} del comercio de esta ciudad, por el cobro que les hace el C. Tesorero general del Estado del derecho de patente de giro, establecido por decreto de la II. Legislatura de 30 de Marzo de 1863, que no consideran legal, porque invade en su concepto las facultades reservadas por la Constitución general en su artículo 112 al Congreso de la Union, no puede menos de reconocer que la cuestion se ha presentado con toda la claridad apotocible en el informe de 17 del actual,